

Señores:

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN

Popayán, Cauca.

E. S. D.

Ref: Proceso: 190013333001-2022-000204-00

Demandante: Jose Joaquin Calix Taquinas y otros

Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura y otros

Asunto: Contestación de la demanda

MATEO MANTILLA LARIOS identificado con cédula de ciudadanía N° 1.020.820.723 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional N° 382.492 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado sustituto de la sociedad **NUEVO CAUCA S.A.S.**, encontrándome dentro del término legal, y en procura de defender los intereses de la misma, me permito contestar el medio de control de reparación directa presentado por el señor **Jose Joaquin Calix Taquinas y otros** en los siguientes términos:

I. MANIFESTACIÓN PRELIMINAR

Tal y como ha podido notarlo el Despacho, el escrito de demanda con sus anexos y pruebas documentales se encuentran compactadas en un archivo de 484 páginas, dentro de las cuales se encuentran apartes vulneratorios del derecho de defensa con que cuenta Nuevo Cauca S.A.S. (en adelante «Nuevo Cauca» o la «Concesionaria») y, en general, los demandados, tal y como se expone a continuación.

Lo primero que se debe señalar es que, en los términos de la Corte Constitucional, *«Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga»*.¹ (énfasis propio)

Lo anterior resulta relevante ya que, tal y como consta en el citado documento, el extremo demandante ha aportado una serie de pruebas ilegibles o incompletas entre las que resalta (i) el Informe Único de Noticia Criminal FPJ-2, (ii) el Informe de Investigador de Laboratorio FPJ-13, (iii) el Informe Ejecutivo FPJ-3, (iv) algunos registros civiles y, (v) el cuadro clínico epicrisis.

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 27 de enero de 2009. Expediente: D-7226.

En ese sentido, solicito de manera comedida que únicamente sean tenidas como pruebas las documentales aportadas por el demandante cuyo contenido sea legible y de su contenido se desprenda que se encuentren completas pues cualquier otra decisión sería contraria al derecho de defensa con que cuentan los demandados. Así las cosas, en el evento en que el demandante subsane la citada irregularidad, Nuevo Cauca se reserva el derecho a pronunciarse respecto de dichas pruebas y, de ser el caso, presentar una nueva contestación de la demanda.

II. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES (DECLARACIONES Y CONDENAS)

Con fundamento en las excepciones que serán formuladas más adelante, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de sustento fáctico y jurídico. Sin perjuicio de esa oposición general, procedo a pronunciarme expresamente en relación con las pretensiones propuestas por los demandantes, en los siguientes términos:

A LA PRIMERA PRETENSIÓN DECLARATIVA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que no existe relación de causalidad entre el actuar de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., que únicamente se encuentre obligada en los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, y el daño que se le quiere imputar pues lo cierto es que, de conformidad con los hechos narrados dentro del escrito de demanda, se puede inferir que el daño tuvo lugar como consecuencia de un hecho que sobrepasó el deber de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

A LA SEGUNDA PRETENSIÓN (PRIMERA DE CONDENAS): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que, al ser consecuencia directa de la declaración que se busca en la primera, no es posible acceder a las condenas que el actor pretende.

En efecto, no tiene sentido cobrar daño emergente por gastos en la obtención de los registros civiles, por ejemplo, cuando muchos de estos tienen una fecha de expedición del certificado anterior a la fecha del accidente. Adicionalmente, no es posible estimar el lucro cesante con ocasión a los dineros dejados de percibir por MARIA EUGENIA CAMPO IPIAS sin primero acreditar que en vida devengaba algún ingreso o si quiera que era laboralmente activa.

En cualquier caso, los perjuicios materiales solicitados carecen de cualquier fundamento razonable pues ninguno de los conceptos reclamados cuenta con los debidos soportes para considerarlos como pruebas del perjuicio supuestamente sufrido, o no existe prueba sobre su veracidad o existencia.

A LA TERCERA PRETENSIÓN (SEGUNDA DE CONDENA): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que, al ser consecuencia directa de la declaración que se busca en la primera, no es posible acceder a las condenas que el actor pretende.

En cualquier caso, los perjuicios solicitados se encuentran indebidamente tasados, de conformidad con los criterios jurisprudencialmente fijados para el reconocimiento de perjuicios morales.

A LA CUARTA PRETENSIÓN (TERCERA DE CONDENA): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que, al ser consecuencia directa de la prosperidad de la pretensión declarativa, con alguna de las de condena, no es posible acceder a los intereses que los actores pretenden.

III. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Procedo a pronunciarme específicamente sobre cada uno de los hechos presentados en la demanda, con la advertencia previa que muchos de ellos están siendo narrados de forma conveniente y de manera incompleta por la parte demandante, mientras que otros son hechos acompañados de comentarios y conclusiones personales de la misma o se encuentran varios hechos expuestos en uno solo, por lo cual solicito que solo sean tenidos en cuenta los hechos que cumplan los presupuestos legales para ser tenidos en cuenta como hechos.

AL HECHO PRIMERO. - Es cierto, de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, a cuyo tenor literal me atengo. No obstante, vale la pena señalar que este hecho también constituye un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad.

AL HECHO SEGUNDO. - Más allá de constituir un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, debe señalarse que, en lo que respecta a Nuevo Cauca, es cierto que la Agencia Nacional de Infraestructura y la citada sociedad suscribieron el Contrato de Concesión No. 11 de 2015, cuyo objeto es *«el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el proyecto»*.

AL HECHO TERCERO. - No se entiende el hecho, está incompleto. El demandante se limita a mencionar la existencia del Contrato de Concesión suscrito entre la ANI y Nuevo Cauca. No obstante, vale la pena señalar que este hecho también constituye un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, por cuanto tampoco fue incluido en la solicitud de conciliación.

AL HECHO CUARTO. - Más allá de constituir un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, nuevamente no se entiende el hecho, si lo que pretende el demandante es señalar que el lugar de ocurrencia del accidente se encuentra a

cargo de Nuevo Cauca S.A.S., lo que corresponde es indicar que es parcialmente cierto. Concretamente, deben atenderse estrictamente los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, en cuyo contenido se evidencian las obligaciones que la concesionaria tenía a su cargo en el sector de ocurrencia del accidente que, dicho sea de paso, no incluían la construcción de las obras que los demandantes extrañan.

AL HECHO CINCO. – Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierto que el señor Noe Campo Ramos es el padre de Maria Eugenia Campo Ipia, de conformidad con el registro civil de nacimiento a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que la señora Rosalvina Ipia Yule sea la madre de Maria Eugenia Campo Ipia. De conformidad con el registro civil de nacimiento aportado en la demanda, la madre de la occisa es «ROSA IPIA», no Rosalvina Ipia **Yule**. Además, no consta ningún documento de identificación en el registro civil aportado para corroborar la información.
- No me consta que los señores Rosalvina Ipia Yule y Noe Campo Ramos sean los padres de Marco Fidel Campo Ipia. Según consta en el registro civil aportado en la demanda, la madre es «ROSA IPIA YULE», no Rosalvina Ipia Yule y el padre es «NOE CAMPO», no Noe Campo **Ramos**. Además, no consta el documento de identificación de ninguno de los padres en el registro civil aportado para corroborar la información.
- Es cierto que el señor Noe Campo Ramos es el padre de Cornelio Campo Ipia, de conformidad con el registro civil de nacimiento a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que la señora Rosalvina Ipia Yule sea la madre de Cornelio Campo Ipia, de conformidad con el registro civil de nacimiento aportado en la demanda, la madre de la occisa es «ROSA IPIA YULE», no Rosalvina Ipia Yule. Además, no consta ningún documento de identificación en el registro civil aportado para corroborar la información.
- No me consta que los señores Rosalvina Ipia Yule y Noe Campo Ramos sean los padres de Diocelina Campo Ipia. No consta en los documentos aportados en la demanda ninguna prueba legible que permita predicar la relación de parentesco.
- No me consta que los señores Rosalvina Ipia Yule y Noe Campo Ramos sean los padres de Rodrigo Campo Ipia. El registro civil aportado en la demanda es ilegible en las denominaciones de la primera columna², por lo que no es posible predicar la relación de parentesco.
- Es cierto que el señor Noe Campo Ramos es el padre de Gustavo Campo Ipia, de conformidad con el registro civil de nacimiento, a cuyo tenor literal me atengo.

² Página 34 de la demanda.

- No me consta que la señora Rosalvina Ipia Yule sea la madre de Gustavo Campo Ipia. Según consta en el registro civil aportado en la demanda, la madre es «ROSA IPIA», no Rosalvina Ipia Yule. Además, no consta ningún documento de identificación en el registro civil aportado para corroborar la información.
- No me constan los lazos de amor, cariño y respeto que señalan los demandantes, por lo que estamos a lo que se pruebe.

AL HECHO SEIS. – Es cierto, de conformidad con el Registro civil de matrimonio de la Registraduría Nacional del Estado Civil indicativo Serial No. 04587929, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO SIETE. – Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es aparentemente cierto que Margia Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a Jose Joaquín Calix Campo. Si bien constan los nombres en el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, no se encuentra información sobre el documento de identificación de ninguno de los padres, por lo que no es dable predicar la relación de parentesco.
- Es cierto que Maria Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a Abner Calix Campo, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que Margia Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a William Calix Campo; de conformidad con la documentación aportada no existe prueba de la relación de parentesco, por lo que no es posible predicar tal vínculo.
- Es cierto que Maria Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a Deicy Milena Calix Campo, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es aparentemente cierto que Maria Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a Luz Adriana Calix Campo, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo. No obstante, no consta información sobre el documento de identificación de la madre, por lo que no es posible predicar la relación de parentesco.
- Es cierto que Joaquin Calix Taquinas es el padre de Leonel Calix Campo, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que Maria Eugenia Campo Ipia y Jose Joaquín Calix Taquinas procrearon a Clara Lorena Calix Campo, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que Maria Eugenia Campo Ipia sea la madre de Leonel Calix Campo. De conformidad con el Registro Civil de Nacimiento, el documento

de identificación de Maria Eugenia Campo Ipia en calidad de madre, es 25.731.248. No obstante, el documento de identificación de la occisa es 25.740.367, de conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía aportada en la demanda.

- No me constan los lasos de amor, cariño, respeto y ayuda mutua que señalan los demandantes, por lo que estamos a lo que se pruebe.

AL HECHO OCHO. - No es cierto, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, la madre de Natalia Campo Ipia es Diocelina Campo Ipia. En consecuencia, no es cierto que la madre de Natalia Campo Ipia sea Maria Eugenia Campo Ipia. Adicionalmente, no me consta la unión con sentimientos de amor, cariño y respetuoso mutuo que señalan los demandantes, por lo que estamos a lo que se pruebe.

AL HECHO NUEVE. - No me consta. De las pruebas aportadas no es posible determinar qué tipo de relaciones o qué formas de convivencia tenía la víctima con sus nietos.

En cualquier caso, los sentimientos subjetivos de la víctima o sus nietos; sin embargo, vale la pena señalar que algunos de ellos, a la fecha de ocurrencia del accidente, tenían 1 año y uno de ellos incluso 5 días de nacido, por lo que estamos a lo que se pruebe.

AL HECHO DIEZ. - Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- No me consta que Yerson Farid Calix Salazar sea nieto de Maria Eugenia Campo Ipia en tanto no me consta que Jose Joaquín Calix Campo -padre de Yerson Farid- sea hijo de Maria Eugenia Campo Ipia³. Por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso respecto de Jose Joaquín Calix Campo. Adicionalmente, de conformidad con el registro civil aportado en la demanda, la cédula de ciudadanía del padre es 1.067.629.997, la cual no coincide con la cédula de Jose Joaquín Calix Campo que es 1.067.529.997. También, la fecha de nacimiento de Yerson Farid Calix Salazar es el 32 de enero de 2019, fecha inexistente en el calendario.
- Es cierto que Abner David Calix Tenorio es nieto de Maria Eugenia Campo Ipia, de conformidad con el registro civil aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que Heyler Johan Calix Muñoz hijo de William Calix Campo sea nieto de Maria Eugenia Campo Ipia en tanto no hay prueba de la relación de parentesco entre Maria Eugenia Campo Ipia y William Calix Campo. Por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso respecto de William Calix Campo.

³ Pronunciamiento sobre el hecho siete de la demanda.

- Es cierto que Deilyn Johana Conda Calix hija de Milena Calix Campo sea nieta de Maria Eugenia Campo Ipia, de conformidad con el Registro Civil de Nacimiento aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.
- No me consta que Katherin Yuliana Medina Calix, Jhon Alex Pavi Calix, Natalia Medina Calix ni Lliner Miguel Medina Calix sean nietos de Maria Eugenia Campo Ipia en tanto no me consta que Luz Adriana Calix Campo - madre de los menores- sea hija de Maria Eugenia Campo Ipia. Por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso respecto de Luz Adriana Calix Campo.
- Es cierto que Yeimi Vanesa Conda Calix y Maily Liced Calix Campo son nietas de Maria Eugenia Campo Ipia, de conformidad con los registros civiles aportado en la demanda, a cuyo tenor literal me atengo. No obstante, se anota que Maily Liced Calix Campo tenía 5 días de nacida cuando falleció su abuela.
- No es cierto que Yesica Llulied Campo Campo y Leidy Rocio Campo Campo sean nietas de Maria Eugenia Campo Ipia en tanto Natalia Campo Ipia - madre de las menores- no es hija de Maria Eugenia Campo Ipia, de conformidad con el registro civil aportado en la demanda.

No me constan el sentimiento de amor incondicional, la compañía, historias ni enseñanzas de MARIA EUGENIA CAMPO IPIA para con sus nietos, por lo que estamos a lo que se pruebe.

AL HECHO ONCE. - No me consta, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO DOCE. - Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierta la afiliación del bus de servicio público a la empresa de transporte de pasajeros llamada Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS, con número interno 1410.
- Es cierto el accidente ocurrió en la ruta Popayán-Santander, de conformidad con las coordenadas fijadas en el informe de la patrullera Jenny Patricia Núñez Martínez, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO TRECE. - Es parcialmente cierto, de conformidad con el cuadro clínico epicrisis, a cuyo tenor literal me atengo. El cuadro clínico epicrisis aportado en la demanda consta de 1 folio donde se acredita que MARIA EUGENIA CAMPO IPIA ingresó al hospital Santa García con ocasión a un accidente de tránsito. Son ciertas las evoluciones efectuadas por el doctor Henry Fernando Orozco el 26 de octubre de 2020 y la doctora María del Mar Meza Cabrera el 29 de octubre de 2020. No obstante, no me constan las dos evoluciones efectuadas el día 30 de octubre de 2020 ni tampoco aquella del 1 de noviembre de 2020, por lo que estamos a lo que se pruebe.

Al respecto, no puede perderse de vista que, de conformidad con la primera página de la epicrisis⁴, la misma consta de tres (3) páginas; sin embargo, solamente se aportó la primera.

AL HECHO CATORCE. – Es cierto, de conformidad con la Inspección Técnica a cadáver y álbum fotográfico de lesiones efectuada por el funcionario de la Policía Judicial Cristian David Guerrero Muñoz y la Noticia Criminal No. 190016000703202000589 de la Fiscalía, a cuyos tenores literales me atengo.

AL HECHO QUINCE. – Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierto que la señora Maria Eugenia Campo Ipia falleció a la edad de 48 años, 4 meses y 28 días, de conformidad con la cédula de ciudadanía y el certificado de defunción, cuyo tenor literal me atengo.
- No es un hecho que Maria Eugenia Campo Ipia tenía toda una vida por delante, es una apreciación subjetiva de los demandantes.
- No me consta que Maria Eugenia Campo Ipia era una mujer trabajadora, que percibía sus propios ingresos de un salario mínimo legal mensual vigente ni menos la destinación de estos. En ninguna de las pruebas aportadas en la demanda se acredita vinculación laboral ni los ingresos de la occisa, mucho menos su destinación, por lo que estamos a lo que se pruebe. Sobre el particular, vale la pena señalar que de conformidad con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la víctima pertenecía al régimen subsidiado de salud, por lo que es posible inferir que no es cierto lo señalado por los demandantes respecto al trabajo de la misma.

AL HECHO DIECISÉIS. – Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierta, la afiliación del bus de servicio público a la empresa de transporte de pasajeros llamada Cooperativa de Motoristas del Cauca - COOMOTORISTAS, con número interno 1410.
- Es cierto que el accidente ocurrió en la vía Popayán-Cali kilómetro 04 + 350 metros, de conformidad con las coordenadas fijadas en el informe de la patrullera Jenny Patricia Núñez Martínez, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO DIECISIETE. – Es cierto, de conformidad con el informe ejecutivo FPJ-2, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO DIECIOCHO – Es cierto, de conformidad con el informe ejecutivo FPJ-3, a cuyo tenor literal me atengo.

⁴ Página 173 de la demanda.

AL HECHO DIECINUEVE. – No es cierto, de conformidad con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito del accidente, el accidente ocurrió en una recta.

AL HECHO VEINTE. – Es cierto. Sin embargo, tenido en cuenta el énfasis del demandante en el hecho, debe señalarse que los canalizadores no son la única forma de desagüe que tiene una carretera y, en cualquier caso, Nuevo Cauca no estaba obligado en los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, a construir canalizadores o recolectores de aguas lluvias en dicho sector.

AL HECHO VEINTIUNO. - Es cierto, de conformidad con el Informe Único de Noticia Criminal FPJ-2⁵, a cuyo tenor literal me atengo.

Al respecto, vale la pena mencionar que el Informe señala que existió una imprudencia por parte del conductor quien (i) excedió el límite de velocidad del sector y, (ii) desconoció las condiciones climáticas; en ambos casos «colocando en riesgo su integridad física, como la de sus pasajeros y los demás usuarios viales».

AL HECHO VEINTIDÓS. - Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierto que el señor Cristian Andrés Lucumi Chara iba conduciendo al momento del accidente, de conformidad con los informes policiales, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que la señora Clara Lorena Calix Campo se encontraba en el vehículo como pasajera, de conformidad con los informes policiales, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que la señora Clara Lorena Calix Campo se encontraba en Estado de embarazo al momento del accidente, de conformidad con la historia clínica aportada, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que la señora Clara Lorena Calix Campo fue atendida en el hospital Santa Gracia donde se le fue diagnosticado estado crítico, de conformidad con la historia clínica aportada, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que la señora Maria Eugenia Campo Ipia se encontraba en el vehículo como pasajera, de conformidad con los informes policiales, a cuyo tenor literal me atengo.
- Es cierto que la señora Maria Eugenia Campo Ipia fue atendida en el hospital Santa Gracia. No obstante, el diagnóstico fue politraumatismo, de conformidad con la epicrisis aportada, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO VEINTITRÉS. – Es cierto, de conformidad con el Informe Único de Noticia Criminal FPJ-2⁶, a cuyo tenor literal me atengo.

⁵ Página 48 y siguientes de la demanda.

⁶ Página 52 de la demanda.

AL HECHO VEINTICUATRO. – Es cierto, de conformidad con el Informe Único de Noticia Criminal FPJ-27, a cuyo tenor literal me atengo. Al respecto, debe señalarse que, de conformidad con el citado Informe, la hipótesis fijada fue el código 138 correspondiente a *«falta de precaución niebla, lluvia niebla o humo; (conducir en estas circunstancias sin disminuir la velocidad y/o sin utilizar las luces»*.

AL HECHO VEINTICINCO. – Es una nueva reiteración al lugar de ocurrencia del accidente, respecto del cual debe señalarse que es cierto el PR 4+ 350; sin embargo, se desconoce de dónde salieron las coordenadas y el sistema de referencia mencionados que, por demás, no coinciden con las fijadas en el Informe Policial de Accidente de Tránsito⁸.

AL HECHO VEINTISÉIS. – No es un hecho, es la apreciación subjetiva de la demandante sobre la construcción de la vía, acompañada de una imagen de Google Earth que no soporta nada. En cualquier caso, vale la pena señalar que este hecho tampoco hizo parte de la solicitud de conciliación.

AL HECHO VEINTISIETE. – No me consta, es una apreciación subjetiva de condiciones técnicas de la vía que no encuentran ningún sustento en el material probatorio aportado. Adicionalmente, vale la pena señalar desde acá que las imágenes aportadas en este hecho no cumplen con los requisitos que la jurisprudencia ha impuesto para este tipo de pruebas, por lo que no es posible identificar si, para el momento del accidente, las condiciones eran las señaladas por el actor.

Así mismo, debe decirse que no es cierto que la inexistencia de canalizadores en la zona de ocurrencia del accidente genera un peligro para la seguridad vial, pues, de conformidad con las hipótesis que manejan las autoridades, el mismo atendió a negligencia del conductor del vehículo.

AL HECHO VEINTIOCHO. – No es un hecho, es una apreciación subjetiva de condiciones técnicas de la vía que no encuentran ningún sustento en el material probatorio aportado. Adicionalmente, vale la pena señalar desde acá que las imágenes aportadas en este hecho no cumplen con los requisitos que la jurisprudencia ha impuesto para este tipo de pruebas, por lo que no es posible identificar si, para el momento del accidente, las condiciones eran las señaladas por el actor.

Cabe anotar que, de conformidad con el Manual de Drenajes y Carretas, el instrumento de drenaje de agua que extraña el demandante se utiliza para temas como, por ejemplo, i) Control de inundaciones; ii) Gestión de agua pluvial; iii)

⁷ Página 53 de la demanda.

⁸ Página 87 de la demanda.

Saneamiento; iv) Tratamiento de aguas residuales; v) Preservación de los suelos y aguas subterráneas de posibles agentes contaminantes. Por tanto, me atenderé a lo demostrado en este proceso.

AL HECHO VEINTINUEVE. - Es parcialmente cierto, de conformidad con el Informe Policial FPJ-3, el conductor sí trató de frenar, pero hubo un desplazamiento incontrolado del vehículo causado por la velocidad, la lluvia y el fenómeno de hidroplaneo.

En cualquier caso, no puede perderse de vista que, de conformidad con los Informes FPJ-2 y FPJ3, que forman parte integral de la noticia criminal citada por el actor, se estableció como hipótesis el accidente una falla humana consistente en el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir en condiciones de lluvia.

AL HECHO TREINTA. - No parece ser un hecho sino una apreciación subjetiva del demandante. Sin embargo, la misma no resulta ser exacta pues el nivel del agua en la carretera no es el único elemento para tener en cuenta cuando se causa el fenómeno del hidroplaneo, un factor determinante es la velocidad con la que vaya el vehículo.

En este sentido, puede existir una cantidad considerable de agua en la carretera a causa de las lluvias intensas, pero si el vehículo se mantiene a baja velocidad, teniendo en cuenta la poca visibilidad y el aumento de la distancia de frenado, no se pierde el punto de contacto entre el pavimento y las llantas.

AL HECHO TREINTA UNO. - No es un hecho, es una apreciación subjetiva de la demandante. En cualquier caso, se debe recordar que el desagüe pluvial no necesariamente está dado por canaletas y que Nuevo Cauca únicamente está obligada en los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, en la cual no existe obligación de construir dichas obras.

AL HECHO TREINTA DOS. - No es un hecho, es una apreciación subjetiva de la demandante. No obstante, se debe señalar que (i) no es una obligación de Nuevo Cauca la construcción de cunetas en la zona del accidente y, (ii) naturalmente al no estar construidas, no existe obligación de hacer mantenimientos rutinarios obligatorios.

AL HECHO TREINTA TRES. - No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante que cree ser un experto técnico en carreteras y su relación con las condiciones climáticas; no obstante, se reitera que no existe obligación contractual de Nuevo Cauca en dicho sentido por lo que no puede ser objeto de reproche.

AL HECHO TREINTA CUATRO. - Es un conjunto de hechos, respecto de los cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- No es un hecho que debido al accidente se haya generado un daño antijurídico a la víctima del accidente y su familia. Concretamente, es una apreciación subjetiva del demandante que, más allá de ser el objeto de litigio, debe ser probado en el marco del proceso.
- No me consta la causa de muerte de la señora María Eugenia Campo Ipia, en el cuadro clínico aportado solo consta la evolución hasta el 29 de octubre de 2025 -que, dicho sea de paso, solo tiene una página-, por lo que, no se aportó prueba en la demanda donde se acredite cuál fue la causa de muerte.

AL HECHO TREINTA CINCO. – No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante que, adicional a ser el objeto del litigio, debe ser probado en el marco del proceso.

AL HECHO TREINTA SEIS. – No es cierto, tal y como se certifica en el informe de Interventoría que se adjunta, para el momento de ocurrencia del accidente, la sociedad Nuevo Cauca estaba cumplida con sus obligaciones de operación y mantenimiento de la vía, incluido el sector de ocurrencia del accidente.

Así mismo, tal y como fue señalado varias veces, en los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, no existe obligación de construir dichas obras. En cualquier caso, vale la pena señalar que esta afirmación también constituye un indebido agotamiento del requisito de procedibilidad.

AL HECHO TREINTA SIETE. – No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante que cree ser un experto técnico en carreteras y su relación con las condiciones climáticas; no obstante, se reitera que no existe obligación contractual de Nuevo Cauca en dicho sentido por lo que no puede ser objeto de reproche.

AL HECHO TREINTA OCHO. – No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante que, adicional a ser el objeto del litigio, debe ser probado en el marco del proceso.

IV. EXCEPCIONES

A. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Nuevo Cauca S.A.S. únicamente se encuentra obligada en los términos del Contrato de Concesión No. 11 de 2015, en el que no se contempla la construcción de las obras extrañadas por los demandantes

1.- Lo primero que se debe señalar es que Nuevo Cauca S.A.S. tiene a su cargo vías de la malla vial nacional ya que suscribió el Contrato de Concesión No. 011 de 2015 con la Agencia Nacional de infraestructura cuyo alcance se resume en

«la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, reversión del corredor Popayán – Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices Técnicos del Contrato», sin que dentro del mismo se contemplara la construcción de canaleta o cunetas en la zona del accidente.

2.- Al respecto, es evidente que la concesionaria no puede ser llamada a responder por actividades que escapen el objeto contractual y sobre las cuales no es responsable, configurando así una falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, el Consejo de Estado ha expuesto que:

«Pasa la Sala a advertir que la jurisprudencia ha definido que la legitimación en la causa: “(...) alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción»

De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación»⁹.

En este sentido, es evidente que no se encuentra acreditada la relación jurídico sustancial entre Nuevo Cauca S.A.S. y la posibilidad de contradecir las pretensiones de la demanda, por lo que debe ser declarada la falta de legitimación en la causa a favor de esta.

3.- Al respecto, si bien es cierto que la mencionada excepción no tiene la vocación de enervar la pretensión en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, no es menos cierto que la legitimación en la causa es un elemento necesario para poder proferir sentencia favorable al demandante o demandado; así, es posible estar convocado al proceso, sin que ello implique que exista legitimación en la causa material. Al respecto, se ha pronunciado la jurisprudencia al decir:

«Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 09 de agosto de 2012. Exp: 2010-00472-01 (AP).

sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

«[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado **-modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante-** que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (negritas en el texto original, subrayas fuera de él).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante —legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares

de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra. De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

«La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no.»¹⁰ (Subrayado y negrillas por fuera del texto).

4.- En este sentido, se debe señalar que, de conformidad con i) la Parte General, ii) la Parte Especial y, iii) el Anexo Técnico 1 del Contrato de Concesión No. 011 de 2015, el lugar de ocurrencia de los hechos objeto de la demanda no implicaba una obligación de construcción de canaletas o cunetas, como lo pretende el demandante.

Así las cosas, el informe de Interventoría del mes del accidente es prueba suficiente de que la concesionaria estaba cumplida en las obligaciones contractuales a su cargo; en otras palabras, al momento de ocurrencia del accidente no existía motivo alguno por el cual se pudiera reprochar a Nuevo Cauca S.A.S., ni mucho menos condenarla en el marco de un proceso judicial.

5.- Por lo anterior, debe el despacho estudiar la relación jurídico sustancial de Nuevo Cauca S.A.S. con las pretensiones de la demanda pues, en razón de lo expuesto, y como ya se estableció en los argumentos esgrimidos, el centro de imputación jurídico no se encuentra en cabeza de la concesionaria. Así, no se puede concluir que existe responsabilidad de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. en los daños sufridos por el demandante, por lo que se solicita que no se accedan a las pretensiones de la parte demandante, debiendo en su lugar declarar no probadas las pretensiones en contra de la concesionaria.

B. Inexistencia de la falla en el servicio: El demandante no prueba, si quiera sumariamente, los requisitos que ha impuesto la jurisprudencia para declarar la falla en el servicio de la administración y/o sus colaboradores

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 04 de abril de 2010, expediente 17.720.

1.- Si en gracia de discusión, el Despacho considera que la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. tiene alguna relación con el lugar de ocurrencia de los hechos, es pertinente mencionar que la falla del servicio, es un criterio de imputación de responsabilidad subjetivo, por lo que es necesario probar (i) el hecho u omisión por parte del Estado que dio origen a la falla del servicio, (ii) el daño antijurídico sufrido como consecuencia de la falla del servicio; y (iii) el nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño sufrido.

En ese sentido, de forma anticipada, se puede decir que de los hechos narrados y los pocos y confusos argumentos jurídicos expuestos por el apoderado de la parte demandante, no se evidencia que exista ninguno de los tres supuestos probatorios que dan origen a la falla del servicio, toda vez que no se menciona cuál es el hecho u omisión en que incurrió la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. como falla del servicio, ni tampoco se dice cuál es el nexo entre el daño antijurídico y el actuar de la sociedad, por lo que en realidad no se ve rastro que pruebe la falla del servicio alegada, en tanto que la Concesionaria no ha incumplido sus obligaciones con relación a las intervenciones que debe realizar en la Vía que le fue concesionada, motivo por el cual no habría falla en el servicio.

2.- Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la falla en el servicio es, por excelencia, el título de imputación para pretender la responsabilidad patrimonial del estado y sus colaboradores, al indicar que:

“Al respecto, la Sala ha sostenido, de tiempo atrás, que la falla del servicio ha sido y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia, para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete -por principio- una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que tal título es el idóneo para asentar la responsabilidad de la Administración.

Es obvio que el Estado tiene la obligación de utilizar adecuadamente los medios de que está provisto, en aras de cumplir sus deberes, de tal suerte que, si se produce un daño por su incuria en el empleo de tales medios, surge su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia y cuidado, no puede ni debe quedar comprometida su responsabilidad.”¹¹

Así mismo, ha dicho el Consejo de Estado que para materialización de la falla del servicio no basta probar el daño antijurídico sufrido, sino que además debe existen otros presupuestos probatorios confirmativos de dicha responsabilidad, así:

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2015, expediente 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794).

“En este punto, es preciso señalar que, según la jurisprudencia de la Sala, cuando el daño irrogado al Estado se origina como consecuencia de un deslizamiento de tierra –que, para el caso, se asemeja al conglomerado que se desprendió de la vía en la que se desarrollaba una obra pública, el mismo es imputable al Estado si: i) el hecho se causa por la omisión, o defectuosa señalización de las vías públicas, ii) se produce un deslizamiento intempestivo de tierra que exigía la instalación de señales preventivas, iii) se omite la señalización de vías que se encuentren en reparación o en sitios que sean considerados de alto riesgo, o iv) se omite la ubicación de medidas preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vías públicas¹².

La Sala ha considerado también que, para que se puedan imputar al Estado por los daños sufridos por las deficiencias u omisiones en la señalización de vías públicas, es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omisión, por parte de la administración, en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control respecto de la realización de obras públicas y del tránsito en las vías, con el fin de prevenir los riesgos que con ellos se generen”¹³ (énfasis propio).

Lo mismo ha sido reiterado en otras jurisprudencias del Consejo de Estado:

5.2. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente proveído, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido, se ha sostenido que:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2003, expediente No. 12.509; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente No. 11.615; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente No. 14.536 y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente No. 12.820.

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2006, expediente No. 15.001.

de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio.

(...).

"2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente"¹⁴.

De acuerdo con los anteriores apartes jurisprudenciales citados del Consejo de Estado, y como ya se había mencionado, en aquellos casos en que se sufra un daño como consecuencia del mantenimiento y operación ejecutado en una vía nacional o su respectiva señalización –como se pretende en la demanda a la cual se refiere este concepto–, el perjudicado deberá probar tanto la previsibilidad de la situación como el hecho de que la misma fuera consecuencia del incumplimiento de un deber legal relacionado con el mantenimiento o señalización de la vía, lo cual no se encuentra acreditado.

Así las cosas, dado que para la procedibilidad de la reparación directa no solamente basta probar el daño antijurídico sufrido, sino que además es necesario acreditar cuál fue la falla del servicio incurrida por los demandados y el nexo de causalidad entre dicha falla y el daño, no se ve rastro que pruebe la procedencia de la reparación directa pretendida.

3.- En desarrollo de todo lo anterior, en el caso concreto es claro que se debe aplicar el régimen de falta o falla del servicio, de tal manera que una primera forma de excluir la responsabilidad de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. se concreta en la prueba de esa ausencia de falla y, a la vez, la prueba de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el corredor vial concesionado.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1º de febrero de 2012, expediente 73001-23-31-000-1999-00539-01 (22464)

De esta forma, en este tipo de casos en los cuales se pretende imputar la responsabilidad por incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico depende exclusivamente de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada.

De este modo, para determinar si se presentó o no una falla en el servicio *(i)* se debe establecer cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración, *(ii)* debe precisarse en qué forma debió haber cumplido la entidad con su obligación, *(iii)* debe establecerse qué era lo que a ella podía exigírsele y, solo si en las circunstancias concretas del caso se establece que no obró adecuadamente, es decir, que no lo hizo como una administración diligente, y por último, *(iv)* se debe determinar si la omisión podría considerarse como la causa directa del daño cuya reparación se pretende.

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto en este acápite, para que pueda considerarse de manera verídica la falla de la administración como causa directa del perjuicio y comprometa de esta manera su responsabilidad, no puede ser cualquier tipo de falla, sino que, por el contrario, debe ser una falla de tal magnitud que teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como anormalmente deficiente.

4.- Ahora bien, en el escrito de demanda el apoderado de la parte actora plantea que el daño es imputable a las entidades demandadas por una supuesta falta de señalización preventiva y la falta de canaletas o cunetas, concretándose así un incumplimiento de la obligación de implementar señales preventivas, así como el mantenimiento de la vía. Sin embargo, desconoce el demandante que la señora Maria Eugenia Campo Ipia no se accidentó por una falla de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

Con lo anterior, debe entenderse que la sociedad Nuevo Cauca S.A.S, al momento del accidente, se encontraba cumpliendo con aquello a lo que se encontraba obligada en virtud del contrato de concesión No. 011 de 2015 que, por demás, es lo único que la vincula al presente proceso. De esta forma, no puede afirmarse que se cumple ni el primer requisito de configuración de la falla en el servicio, consistente en una obligación legal incumplida o cumplida defectuosamente.

Al respecto, vale la pena recordar lo señalado en el pronunciamiento a los hechos, referente a que en el mundo carretero existen diversos medios de desagüe pluvial, dentro de los cuales las cunetas o canaletas son solo una de las múltiples posibilidades con que cuenta el titular de la vía para lograr dicho fin. Así las cosas, el Contrato de Concesión No. 11 de 2015 no contemplaba en la zona del accidente la

construcción de sistemas de desagüe pues los que existían al momento de suscripción del negocio jurídico, ya eran suficientes para lograr dicho fin.

Concretamente, y contrario a la consideración del demandante, las cunetas, canalizadores o recolectores de agua lluvia no son la única forma de drenaje de la corona para brindar seguridad y comodidad al tránsito automotor, sino que se debe tener en cuenta el drenaje de la corona y las otras modalidades de drenaje superficial. En ese orden de ideas, el Manual de drenaje para carreteras¹⁵ aclara que:

“Aunque hay múltiples situaciones en una carretera que producen la oportunidad del hidroplaneo, entre los lugares donde se pueden producir encharcamientos con mayor frecuencia se encuentran los puntos bajos de las curvas verticales cóncavas, las transiciones en las curvas horizontales, las áreas de pavimento con pendiente transversal insuficiente y las franjas a huelladas de los pavimentos asfálticos. El control del espesor mínimo de película de agua que hace que la superficie sea susceptible al hidroplaneo, de manera que éste no sea alcanzado durante la lluvia a las velocidades a las cuales circulan los vehículos, se puede lograr con acciones como:

- *Incrementar la pendiente transversal de la calzada y de las bermas, para reducir la trayectoria de flujo (su efecto es marginal).*
- *Incrementar la textura superficial del pavimento colocando, en el caso de los pavimentos asfálticos, una capa de rodadura de macro textura rugosa y, en el caso de los pavimentos rígidos, efectuando operaciones como el ranurado superficial en sentido transversal con profundidades, oblicuidades e intervalos apropiados que aseguren la prevención del hidroplaneo.*
- *Remover el agua de la superficie del pavimento mediante el empleo de mezclas asfálticas de tipo drenante. Las capas de rodadura elaboradas con mezclas drenantes no sólo contribuyen al mejoramiento de la visibilidad al reducir el flujo de agua superficial en momentos de lluvia, sino que, además, suministran un medio de drenaje para el agua bajo los neumáticos, reduciendo el potencial de hidroplaneo. Se debe tener en cuenta, no obstante, que estas mezclas se tienden a colmatar con el tiempo y que las operaciones de limpieza son costosas y requieren alta periodicidad.*
- *En algunas referencias bibliográficas se menciona la posibilidad de instalar drenes perforados en la capa de rodadura en sentido transversal a intervalos regulares o en sentido longitudinal en correspondencia con la línea de separación entre carriles. Sin embargo, su instalación y su mantenimiento son dispendiosos y se desconoce el efecto que tenga su colocación sobre el comportamiento estructural de los pavimentos, motivo por el cual el Instituto Nacional de Vías se abstiene, por el momento, de recomendar su empleo en las carreteras nacionales.*

¹⁵ Ministerio de Transporte. “MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS” 2009.

Si los ajustes físicos de la vía no son factibles, es necesario adoptar medidas reglamentarias para limitar la velocidad de circulación cuando la superficie del pavimento se encuentre húmeda.”

De igual manera, frente al tema de la señalización de la vía, basta con revisar los informes policiales allegados para concluir que el lugar de ocurrencia del accidente contaba con la señalización adecuada. Concretamente, en sentido vial Popayán-Cali cuenta con dos señales verticales así: (i) señal preventiva SP-04, que significa curva pronunciada a la derecha y; (ii) una señal reglamentaria SR-30 de velocidad máxima permitida correspondiente a 50 kilómetros por hora.

Adicionalmente, en el sentido vial Cali - Popayán, se aprecia (i) señal preventiva SP-01 que significa curva pronunciada a la izquierda, (ii) señal reglamentaria SR-30 de velocidad máxima permitida correspondiente a 50 kilómetros por hora, (iii) señal preventiva SP-70 sobre delineadores de curva horizontal sencillo y, (iv) señal reglamentaria SR-26 de prohibido adelantar.

En este mismo sentido, respecto de la señalización horizontal, el mismo Consistente en línea longitudinal continua color blanco de demarcación y delimitación de carril en **buen estado de conservación**, esta se ubica en los dos sentidos viales. Luego pasan a ser segmentadas ya que desde uno de los costados de la vía Cali - Popayán, realizan el ingreso y salida unos predios privados.

De igual forma posee demarcación de carril consistente en líneas horizontales longitudinales continuas, color amarillo, que delimitan la calzada en los dos sentidos viales Popayán- Cali y Cali – Popayán, esta señalización prohíbe realizar maniobras de adelantamiento a los vehículos que transitan en cualquiera de los dos sentidos. Asimismo, se aprecia varios metros antes una baranda de contención, fuera de la calzada en el sentido vial Cali - Popayán.

Por lo tanto, frente a esta obligación Nuevo Cauca cumplió con su deber de velar por el mantenimiento y señalización de la carretera en la que les advierte a los usuarios de la vía la aproximación de una curva cerrada en ambos sentidos de la vía. Esto porque según el Manual de Señalización Vial, las señales de curva cerrada y los delimitadores de curva tienen el siguiente propósito:

*“Las señales de curva cerrada se deben utilizar para advertir al conductor la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor a 60 km/h, situación que obliga al conductor a poner más atención y disminuir la velocidad. Pueden complementarse con la señal reglamentaria Velocidad Máxima SR-30 y con señales SP-75 DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL, ubicadas dentro de la curva.
(...)”*

El delineador de curva horizontal se utiliza para guiar al usuario en la conducción por una curva pronunciada, cerrada o muy cerrada con respecto a la geometría

predominante en un tramo de vía. Se deben usar siempre en grupos de 3 o más y se deben colocar siempre en el costado externo de la curva. Estas señales no deben ser utilizadas para indicar la presencia de una obstrucción o el inicio de una barrera de contención. Podrán ser de color amarillo o amarillo verde fluorescente.”¹⁶

Así las cosas, el hecho de que las señales hayan sido desconocidas por el conductor del vehículo, de ninguna manera se equipara a que las mismas no existieran y, en consecuencia, que hubiese una falla en el servicio de parte de los encargados de la instalación y mantenimiento de las mismas.

5.- En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que en el caso en concreto no existe prueba alguna que acredite la omisión por parte de la Concesionaria en la prevención y ejecución de sus obligaciones contractuales, pues lo cierto es que la Concesionaria únicamente está obligada al cumplimiento de ciertas actividades acordadas en el Contrato de Concesión No. 11 de 2015, obligación que ha estado cumpliendo eficientemente.

C. Ausencia de nexo causal – Hecho de un tercero: De conformidad con el material probatorio el accidente fue causado por la imprudencia del conductor del vehículo en el que se movilizaba la víctima, quien iba en exceso de velocidad y desatendiendo las condiciones climáticas

1.- Por otro lado, es necesario hacer referencia a hechos que permiten concluir que, en el accidente de tránsito que produjo los daños sufridos por los demandantes, existe una causal eximente de responsabilidad consistente en la ruptura o ausencia del nexo causal y, más concretamente, el hecho de un tercero.

En el régimen de responsabilidad aplicable, para que el Estado se libere de su responsabilidad debe demostrar la intervención de un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, como sería la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o, la culpa de la víctima.

La Concesionaria, en el caso en concreto está exenta de responsabilidad porque es posible inferir la presencia de un elemento extraño -hecho de un tercero- dentro de la situación fáctica. Asimismo, del material probatorio aportado dentro del proceso se colige una conducta externa a la Concesionaria, generando así la intervención de factores que rompen el nexo de causalidad en la producción del daño cuya indemnización pretende la parte actora. Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado que:

¹⁶ Ministerio de Transporte. “MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” 2015.

“Para dilucidar la cuestión, la Sala examina enseguida los requisitos que el Consejo de Estado ha establecido para la prosperidad de la excepción denominada “hecho del tercero”. Esta Corporación se ha manifestado en diversas ocasiones sobre esta figura, como una causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada y para tal efecto ha determinado algunas exigencias, a saber:

*“(i) **Que sea la causa exclusiva del daño.** Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención.*

*(ii) **Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad,** es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado”.*

*(iii) **Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad;** porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”.*

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con

culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño.”¹⁷

2.- Bajo este supuesto, se debe recordar que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, -concretamente, los informes realizados por las autoridades pertinentes-, la causa del accidente consiste en la negligencia del conductor del bus con placas SDW-385.

En primer lugar, el Informe Único de Noticia Criminal FPJ-2, en su página 3 señala que *“por razones ajenas a nuestro conocimiento quien guía en su momento el móvil tipo bus de placas SDW-385, no está pendiente del tramo vial por donde se desplaza, colocando en riesgo su integridad física, como la de sus pasajeros y la de los demás usuarios viales”, agregando que “al llegar a inmediaciones del kilómetro 04+350 metros, tramo de vía curva, excede los límites de velocidad permitidos para este tramo de vía, el cual es de 50 km/h, no realiza el trazado correcto de la curva, continua en línea recta (...)”*. (énfasis propio).

Esa misma información quedó consignada en el Informe Ejecutivo FPJ-3 de 20 de octubre de 2020, en el que además se incluyó como hipótesis del accidente el código 138 al conductor que significa falta de precaución niebla, lluvia niebla o humo, indicando que *“se establece que efectivamente la ocurrencia del accidente de tránsito se relaciona con una serie de eventos asociados con una falla humana, de uno de los intervinientes, una falta de precaución en la conducción de vehículos en condiciones atmosféricas extremas lluvia”*. (énfasis propio)

Así mismo, en la página 7 y siguientes de este último informe, la autoridad de policía expuso detalladamente los motivos por los cuales se considera que existió un *“actuar imprudente por parte de uno de los señores conductores del vehículo tipo bus de placas SDW-385”*, reiterando el exceso de velocidad y, en general, la imprudencia con que actuó el señalado sujeto.

De igual manera ocurre con (i) el Informe de Acta de Inspección a Lugares – FPJ-09, (ii) el Informe Policial de Accidentes de Tránsito y (iii) el Informe de Investigador de Laboratorio FPJ-13, en los que se señalaron las mismas causas del accidente.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 28 de enero de 2015. Exp. 32912

3.- En síntesis, , y a modo de conclusión no puede surgir ningún tipo de responsabilidad para Nuevo Cauca S.A.S. pues, el único centro de imputación de dicha falla es el señor Cristhian Andrés Lucumi -en representación de Coomotoristas del Cauca- que, para estos efectos, resulta ser un tercero ajeno a la Sociedad Nuevo Cauca y su actuación resultó imprevisible e irresistible para la concesionaria pues esta se encontraba cumpliendo cabalmente sus obligaciones y no pudo prevenir la ocurrencia del accidente.

D. Indevida tasación de perjuicios materiales: Los demandantes pretenden un daño emergente que no se causó y un lucro cesante que resulta contrario a la realidad jurídica

1.- De conformidad, con el artículo 1614 Código Civil el daño emergente es *“el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”*. Por este concepto, la demandante solicita que *“se debe a favor de los demandantes o quien o quienes sus derechos representen al momento del fallo, el equivalente a SIETE MILLONES DE PESOS MCTE, el valor que se demuestre en el proceso, correspondiente a los gastos funerarios, gastos de transporte y hospedaje en la ciudad de Popayán, desde el 27 de octubre al 4 de noviembre 2020, así como todos los gastos, de que debieron incurrir en papelería y obtención de documentos, registros civiles”*.

2.- En este sentido, vale la pena recordar que es un rubro que requiere de los soportes documentales que prueben todos los costos en los que se incurrió con ocasión de los gastos en transporte, hospedaje, papelería y obtención de documentos, registros civiles y gastos funerarios, de las víctimas indirectas que reclaman. Sin embargo, en el expediente no se aportó ningún elemento de juicio que así lo acreditara.

3.- En primer lugar, se debe declarar la excepción de pleito pendiente por cuanto los gastos en transporte y hospedaje han sido reclamados en el proceso adelantado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán con el radicado No. 19001-3333-003-2023-00003-00, donde CLARA LORENA CALIX CAMPO funje como víctima directa. En esa medida, los mentados perjuicios se encuentran en conocimiento de otro despacho y no es posible efectuar un doble reconocimiento, toda vez que ello implicaría un enriquecimiento sin justa causa por parte de los demandados. Adicionalmente, ninguno de los documentos aportados en la demanda da cuenta alguna de cuáles fueron los gastos de *“transporte y hospedaje”* de los demandantes. Frente a ello, es importante recordar que es carga de los actores *“demostrar el monto*

de las erogaciones”¹⁸ alegadas. En esa medida, “no se trata de negar la prestación por cúmulo de indemnizaciones cuando provienen de causa jurídica independiente, sino por falta de prueba del perjuicio, en cuanto no se probó el monto como tampoco el carácter personal del daño”¹⁹. Así, sin existir prueba alguna de los gastos en que incurrieron, no es posible otorgar dicho reconocimiento.

4.- En segundo lugar, alegan un reconocimiento por los gastos de papelería y obtención de registros civiles que tampoco encuentran respaldo en ninguna prueba. De hecho, varios de los registros civiles aportados en la demanda fueron expedidos con anterioridad al accidente. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre la obtención del registro civil y la demanda presentada.

Verbigracia, el registro civil de José Joaquín Calix Campo -que además no prueba su calidad de hijo de la occisa- fue expedido el 21 de marzo de 2018, casi dos años antes de la muerte de Maria Eugenia Campo Ipia; el registro de Yerson Farid Calix Salazar fue expedido el 08 de febrero de 2019, más de un año antes del accidente; los registros de Abner Calix Campo y Abner David Calix Tenorio fueron expedidos el 28 de febrero de 2018 y de 2019 respectivamente; el de Deicy Milena Calix Campo fue expedido el 27 de febrero de 2018; el de Deilyn Johana Conda Calix fue expedido el 29 de septiembre de 2015; el de Luz Adriana Calix Campo fue expedido el 21 de marzo de 2018; el registro de Jhon Alex Pavi Calix fue expedido el 20 de enero de 2010; el de Yuliana Medina Calix el 26 de abril de 2019; el de Lliner Miguel Medina Calix tiene fecha de inscripción del 10 de abril de 2012; el de Natalia Medina Calix fue del 19 de agosto de 2015; el de Leonel Calix Campo fue expedido el 25 de abril de 2018; el de Lorena Calix Campo fue expedido el 28 de febrero de 2018; el de Natalia Campo Ipia fue expedido el 03 de agosto de 2005, solo por mencionar algunos ejemplos. **Todos**, expedidos con anterioridad al 01 de noviembre de 2020, día de la muerte de Maria Eugenia Campo Ipia de acuerdo con el registro civil de defunción.

En esa medida, no se demuestra que los actores hayan incurrido en gasto alguno de papelería con ocasión de la obtención de los registros civiles, cuando estos documentos se encontraban en poder de los demandantes antes de la muerte de Maria Eugenia Campo Ipia. Con ello, se rompe cualquier vínculo causal que pretendan alegar los accionantes entre dichos gastos y el caso que nos convoca. Precisamente, tratándose de daño emergente, necesariamente se debe probar “que

¹⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 22 de abril de 2015. Rad. 15001-23-31-000-2000-03838-01(19146).

¹⁹ Ibidem.

*algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega*²⁰. Ahora bien, es imposible establecer que la obtención de los registros civiles fueron acciones consecuentes de la muerte de Maria Eugenia Campo Ipia cuando estos fueron expedidos con anterioridad a su muerte. Ello, solo podría concluirse en caso de que los demandantes predijeran el futuro, evento que no es objeto de discusión en sede judicial por evidentes cuestiones de razonabilidad.

5.- En tercer lugar, los demandantes pretenden que se reconozcan gastos funerarios. Para tal efecto, relacionaron en el acápite de pruebas la Factura de Venta No. 082 de Funerales Santa Cruz. Sin embargo, al revisar los documentos aportadas en la demanda, dicha factura no se encuentra en ninguno de los documentos. Nuevamente, sin prueba de la erogación en que supuestamente incurrieron no es posible reconocer ningún rubro por concepto de daño emergente con ocasión a gastos funerarios.

6.- Por otro lado, respecto del lucro cesante, en los términos del artículo 1614 del Código Civil, este es *“la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.”*; rubro respecto del cual reclaman los actores *“la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$380.000.000.00) representados en los dineros que dejo de percibir la señora MARIA EUGENIA CAMPO IPAS (sic), teniendo en cuenta lo que dejados de percibir, durante la vida probable de acuerdo al DANE, quien al momento de fallecer tenia (sic) 48 años 4 meses y 28 día, con probabilidad de vida, de 77.10, es decir que le restaba mas (sic) de 29 años de vida, mas aun cuando era una mujer sana, y sus ingresos mensuales que corresponden a un salario mínimo legal mensual vigente”*.

7.- La indebida tasación del perjuicio radica, inicialmente, en la falta de prueba. Tratándose de lucro cesante, *“como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna”*²¹. En esa medida, si bien el lucro cesante corresponde al provecho no percibido, es necesario demostrar que dicho provecho existía. Es decir, los actores no acreditan de forma si quiera sumaria la existencia de una actividad generadora de ingresos en curso al momento de la muerte de Maria Eugenia Campo Ipia. Por el

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2013. Rad. 19001-23-31-000-1999-00288-01(21564).

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de julio de 2019. Rad. 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572).

contrario, se limitan a afirmar que los ingresos correspondían a un salario mínimo legal mensual vigente, sin documento alguno que sustente su afirmación. Así, para justificar el supuesto lucro cesante se basan en escenarios hipotéticos y en estimaciones arbitrarias, sin respaldo documental idóneo que permita acreditar dicho supuesto.

8.- Así las cosas, más allá de la falta de prueba respecto del trabajo efectuado por la víctima y el salario devengado por dicho concepto, suponiendo que el dicho de los demandantes es cierto, habría que acudir al pago de pensión de sobrevivientes y a la revisión de si los demandantes solicitaron la misma. En efecto, el Consejo de Estado ha reiterado la normativa pensional en los siguientes términos:

“El cónyuge y la compañera o compañero supérstite son beneficiarios de la sustitución pensional cuando al momento de fallecimiento del causante: a) tenga al menos 30 años de edad; b) logre demostrar que estuvo haciendo vida marital con él hasta su muerte; y, finalmente c) que convivió con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”²².

9.- En ese sentido, si la señora Maria Eugenia Campo Ipia percibía ingresos derivados de su trabajo, correspondería a su cónyuge José Joaquín Calix Taquinas -de acuerdo con el pronunciamiento al hecho seis de la demanda- efectuar la reclamación que en derecho corresponde. De hecho, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es excluyente con el reconocimiento del lucro cesante dado que ambos rubros coinciden en su causa. Al respecto, el Consejo de Estado ha estimado que:

“La causa del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes [...] en calidades de beneficiarios del fallecido, es la misma por la que procedería la indemnización del lucro cesante que solicitan, circunstancia que, a juicio de la Sala, torna en improcedente el reconocimiento de la indemnización solicitada por aquellos, por cuanto la manutención que le habría dado su padre en vida se encuentra cubierta por la mesada pensional”²³.

10.- En virtud de lo anterior, si la víctima era laboralmente activa -como lo afirman los accionantes- habría lugar al reconocimiento de pensión de sobrevivientes para cubrir aquellos ingresos dejados de percibir con ocasión a su

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2014-00041-01 (1355-15).

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-31-000-2011-10050-01(53651).

fallecimiento. Prestación que además, al generarse a través del sistema de seguridad social sería vitalicia para el cónyuge, garantizando una protección efectiva, proporcionada y admisible jurídicamente. En consecuencia, no habría lugar al reconocimiento de lucro cesante por tal concepto, como erradamente lo pretenden los demandantes.

En cualquier caso, incluso si se considerase que no existe una petición indebida de perjuicios y que es procedente el lucro cesante, el mismo no puede decretarse por falta de prueba de la dependencia económica de los demandantes respecto de la señora Campo Ipia.

11.- En síntesis, existe una indebida tasación de ambos perjuicios materiales solicitados por cuanto (i) en el daño emergente se están pretendiendo cobrar rubros no probados o, cuyo erogación se generó antes del accidente y; (ii) para el lucro cesante, no se encuentra acreditado el elemento fundamental que es el ingreso percibido, ni la dependencia económica de los demandantes y, en cualquier caso, se debió acceder a la pensión de sobreviviente.

E. Indebida tasación de perjuicios inmateriales: Los demandantes, en un claro desconocimiento de los lineamientos jurisprudenciales, pretenden las máximas indemnizaciones posibles por concepto de daño moral, aun cuando no cuentan con la prueba del criterio objetivo requerido para realizar la tasación.

1.- La jurisprudencia nacional se ha encargado de unificar la forma de tasación del daño moral en caso de muerte; así, se ha dicho que la reparación de este tipo de daño va a depender del nivel de parentesco existente entre la víctima y la persona respecto de la cual se pretende el reconocimiento y el nivel de cercanía afectiva entre ellos. Al respecto se expuso:

“Para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas”²⁴.

En esa línea, los topes indemnizatorios se establecen de acuerdo con el nivel al que pertenezcan las víctimas. Para tal efecto y por regla general, en los niveles 1 y 2 se requiere prueba del estado civil, mientras que para los niveles 3 y 4 se requiere, adicionalmente, la prueba de la relación afectiva. Los niveles establecidos por la jurisprudencia en sentencia de unificación son los siguientes:

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).

GRAFICO No. 1					
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Regla general en el caso de muerte	Relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

25.

Conforme a lo anterior, no se entiende lo que pretenden los demandantes al solicitar un mismo valor para cada uno de los supuestos acreedores de este perjuicio pues hay un claro desconocimiento de la clasificación de los niveles en los cuales la jurisprudencia ha dividido los grados de parentesco. Así, la pretensión correspondiente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES solo es predicable respecto de las relaciones afectivas conyugales y paterno filiales. Ahora, erradamente pretenden los accionantes que se reconozca la misma suma para aquellas relaciones de segundo y tercer nivel de consanguinidad o civil.

2.- Adicionalmente, si bien para los dos primeros niveles no se requiere prueba de la relación afectiva, ello no significa que la misma no pueda ser requerida en ciertos casos. En efecto, el Consejo de Estado ha establecido que *“no puede predicarse presunción de aflicción, la cual como presunción que es, admite prueba en contrario”*²⁶ (énfasis propio). En ese orden de ideas, es pertinente cuestionar el nivel de cercanía de los accionantes con la víctima.

3.- En efecto, no es predicable relación de cercanía entre dos familiares que estuvieron en el mismo plano terrenal por un lapso de tiempo de cinco días. De hecho, no es posible que exista aflicción, dolor, sentimientos de desesperación y congoja²⁷ -daño moral- en un ser humano que no tiene tal capacidad neurocognitiva ni emocional. Lo anterior, en medida que la respuesta de un bebé de cinco días de nacido se limita a necesidades fisiológicas básicas y malestar ante cambios sensoriales. En ese sentido, la relación de cercanía entre Maily Liced Calix Campo - quien tenía cinco días de nacida cuando murió su abuela- se desvirtúa por la ausencia en su relación afectiva dados los límites temporales enunciados. ¿Cómo

²⁵ Ibidem.

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de febrero de 2013. Rad. 68001-23-15-000-1996-12379-01(25334).

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 24 de enero de 2019. Rad. 19001-23-33-000-2014-00372-01(0103-17).

podría experimentar dolor, desesperación y congoja un bebé que responde únicamente a necesidades fisiológicas básicas? Menos aún, cuando “*para un bebé, la muerte no es una noción real*”²⁸. Así, Maily Liced Calix Campo, recién nacida para el momento de los hechos, no tenía el desarrollo cerebral -dada su corta edad- para experimentar el daño moral que se reclama en la demanda. En consecuencia, dicho perjuicio no puede ser reconocido.

4.- Precisamente, si bien la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de presumir el daño moral dado el grado de parentesco, lo cierto es que dicha presunción no opera de forma automática ni absoluta, especialmente cuando se trata de relaciones afectivas no plenamente acreditadas o núcleos familiares cuya configuración no es evidente. En tales eventos, la carga probatoria recae en quien alega el perjuicio, debiendo acreditar no solo la existencia del vínculo con la víctima, sino la intensidad del mismo y las condiciones particulares de la relación que justifiquen el reconocimiento del daño. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha estimado con buen criterio:

*“Casos como el que hoy ocupa a la Sala, justifican la necesidad de demostrar el perjuicio moral, más allá de cualquier presunción, pues no puede perderse de vista el concepto de familia, su importancia para determinar la procedencia de tal perjuicio, ya que debe apreciarse: - cómo estaba conformada la familia?; - qué rol desempeñaba la víctima al interior de su familia?; - cómo estaban definidas las relaciones entre la víctima y los demás miembros de la familia?; - se trataba de una familia que convivía o no en un mismo espacio?; - se trataba de una familia que estaba disgregada, o de una familia fruto de diferentes relaciones de los padres [...]”*²⁹.

En ese orden de ideas, no basta con que se acredite la relación de parentesco, cuando, las circunstancias del caso y la corta edad de varios accionantes permite cuestionar cuál era el grado de cercanía con la víctima que generara la configuración del daño moral alegado. En similar sentido, Yerson Farid Calix Salazar, Abner David Calix Tenorio y Katherin Yuliana Medina Calix tenían 1 año; Deilyn Johana Conda Calix y Nathalia Medina Calix tenían 5 años y; Yeini Vanesa Conda Calix tenía 4 años para el momento en que falleció Maria Eugenia Campo Ipia. Si bien no se desconoce la posibilidad de que existiera afecto hacia figuras familiares cercanas en la infancia, no se acredita prueba alguna que permita concluir que tales vínculos hubiesen alcanzado un nivel de solidez emocional suficiente para justificar una indemnización por daño moral en los términos exigidos por la jurisprudencia.

²⁸ Stanford Medicine, Children’s Health. Los niños y su noción de la muerte.

²⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de febrero de 2013. Rad. 68001-23-15-000-1996-12379-01(25334).

5.- Aunado a lo anterior, y tal y como se desarrolló con suficiencia en la contestación a los hechos del 5 al 10, es importante destacar que varios de los registros civiles aportados no acreditan la relación de parentesco entre la víctima y los accionantes. Como se puede corroborar a partir de los registros civiles aportados en la demanda, algunos son ilegibles, otros no cuentan con los nombres de los accionantes o la víctima o los documentos de identificación correspondientes y en algunos casos, los documentos de identificación no coinciden o contienen datos sobre personas distintas a las relacionadas en los hechos de la demanda. Ante ello, resulta completamente pertinente cuestionar los vínculos afectivos alegados.

6.- Dicho esto, no resulta procedente el reconocimiento y condena de rubro alguno por concepto de daño moral para varias de las personas respecto de las cuales se pretendía, pues no existe una debida clasificación de los parientes ni una prueba idónea, o al menos legible en algunos casos, de la relación de parentesco o la prueba de la relación afectiva dadas las circunstancias del caso que nos convoca, que constituyen los requisitos necesarios para el reconocimiento y la tasación de este tipo de daño.

7.- En este sentido, es claro que existe una indebida tasación de los perjuicios inmateriales pretendidos por los demandantes y, más concretamente, que los mismos no pueden ser reconocidos por cuanto no existe prueba del elemento objetivo requerido para tal procedencia o, en otras palabras, una prueba que acredite la relación de parentesco de manera efectiva y certera, ni tampoco, demostración alguna de la relación afectiva entre los mismos.

V. OPOSICIÓN A LA ESTIMACIÓN DE PERJUICIOS Y LA ESTIMACIÓN JURADA DE LA CUANTÍA

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 162 del CPACA, uno de los requisitos de la demanda en la estimación razonada de la cuantía, y teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del mismo Código, *"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil"* hoy Código General del Proceso, con fundamento en lo establecido en el artículo 206 del CGP, es necesario poner de presente que me opongo a cada una de las estimaciones indiciadas en el correspondiente acápite de la demanda, puesto que no se sabe de dónde salen las cifras reclamadas, ya que no obra en el expediente certificación alguna que certifique el supuesto la necesidad de reconocer la cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes alegados, ni hacen caso a los límites establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251. Además, aparentemente se trata de un valor subjetivo

que depende de la mera voluntad de la demandante y carecen de prueba alguna dentro del expediente.

VI. PRUEBAS

A. Documentales:

En los términos de los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas complementarias, con la contestación de la demanda presento los documentos a los que se hacen referencia a continuación, por lo cual solicito que se tengan como pruebas documentales las siguientes, que fueron aportadas al momento de contestar la demanda, en el correo que se adjunta.

1. Contrato de Concesión No. 12 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Aliadas para el Progreso.
2. Informe Gerencial Mensual No. 60.
3. Informe Mensual Ejecutivo de Interventoría de 1 al 31 de octubre de 2020.
4. Manual INVIAS de señalización vial.
5. Manual de drenaje para carreteras.
6. Certificación de afiliación ADRES de María Eugenia Campo Ipia.

B. Interrogatorio de parte:

En los términos de los artículos 198 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas complementarias, con la contestación de la demanda solicito los interrogatorios de parte de i) Noe Campo Ramos, ii) Jose Joaquin Calix Taquinas, iii) Abner Calix Campo, iv) Deicy Milena Calix Campo, v) Luz Adriana Calix Campo, vi) Jhon Alex Pavi Calix, vii) Llines Miguel Medina Calix, viii) Marco Fidel Campo Ipia, ix) Cornelio Campo Ipia, x) Diocelina Campo Ipia, xi) Rodrigo Campo Ipia, xii) Gustavo Campo Ipia, xiii) Leonel Calix Campo, xiv) Clara Lorena Calix Campo, xv) Natalia Campo Ipia, y, con el fin de que se absuelvan los cuestionarios que formularé sobre los hechos relacionados con el proceso.

C. Testimonios:

En los términos de los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso y demás normas complementarias, con la contestación de la demanda solicito el testimonio de Cristhian Andrés Lucumi Chara, con el fin de que se absuelva el cuestionario que formularé sobre los hechos relacionados con el accidente del 26 de octubre de 2020 relacionado con el proceso y, más concretamente, sobre su eventual relación de causalidad con aquel.

VII. NOTIFICACIONES

Los datos de Notificación de la parte convocada y el suscrito son los siguientes:

Mateo Mantilla Larios (Apoderado especial parte demandada -Nuevo Cauca S.A.S.)

Calle 100 No. 8A - 49 (Torre B - Oficina 518)- Bogotá

Celular: 3004813824

Correo electrónico: mateo.mantilla@santosrodriguez.co

Del señor Juez, muy respetuosamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

MATEO MANTILLA LARIOS

C.C. 1.020.820.723 de Bogotá D.C.

T.P. 382.492 del C. S. de la J.